

## Crónica del mes Enero - 2006

Los salvadoreños inician el año 2006 bajo un clima de preocupante inseguridad pública. La seguridad ciudadana, la violencia y la delincuencia son, pues, temas que ameritarán mayor atención durante el presente año. Ni los planes estatales orientados a la reducción de homicidios ni el debate generado por algunos sectores nacionales han incidido positivamente en la disminución de los índices de violencia y la mejora en la situación de la seguridad ciudadana. El año pasado cerró con cifras alarmantes, planes gubernamentales errados y una mayor percepción de inseguridad entre la mayoría de salvadoreños. El 2006 inicia con nuevo director policial y, al parecer, un cambio de enfoque en el Ejecutivo; pero esto no es suficiente para que se den avances concretos en la materia.

Las autoridades han fallado también en apaciguar los ánimos de dirigentes y militantes de los partidos políticos que, en plena campaña electoral, han arremetido violentamente en contra de sus adversarios. Mientras el mismo presidente de la República acusa al principal partido de oposición de ser el responsable de los hechos de violencia electoral, su ministro de Gobernación no duda en señalar al FMLN como el principal aliado de los pandilleros y de organizaciones sociales, otros agentes considerados por el gobierno de ARENA como terroristas. Las acusaciones no pasan de eso. Ni siquiera se presentan pruebas para seguir un proceso judicial; por tanto, lo más probable es que sea una enésima estrategia para calumniar al adversario político.

En todo caso, la definición de la agenda nacional que marcará este año conduce, ineludiblemente, al tema de la violencia y la seguridad ciudadana. Hay otros asuntos vitales como las elecciones, el TLC con los Estados Unidos, la educación pública y salud de calidad, la gestión de riesgos y la generación de empleos, pero no hay duda que la situación de inseguridad de los salvadoreños se impone a la mirada del observador más acucioso.

El año pasado culminó con los datos y estadísticas más alarmantes en el último lustro. La prensa salvadoreña ha hecho eco de algunos manejados por la Policía: 3 761 homicidios y 66 503 detenciones por diversas causas, entre otros. El número de detenciones únicamente fue superado en el 2004, cuando Francisco Flores todavía se hallaba en su frenética caza de cualquier sospechoso de ser pandillero o delincuente.

Respecto de lo político, como es de esperarse en el marco de la coyuntura electoral que atraviesa el país, los partidos y sus candidatos afinan estrategias para hacerse de las cuotas de poder en disputa. Los comicios legislativos y municipales se hallan a escasos días y hay que apresurarse, razonan los conductores de campaña de los respectivos partidos. Cualquier método para reducir y atacar al adversario —aunque fuere la violencia— es bienvenido, con tal de apartarle de la contienda. Tampoco vale mucho la ley electoral y los plazos fijados previamente en la misma. El objetivo es copar a los salvadoreños de los mensajes electorales. Los partidos han llenado el paisaje urbano salvadoreño y los espacios televisivos, radiales y escritos con su propaganda: el país vive una invasión electoral en los ámbitos público privado. Pese a haber otros asuntos políticos relevantes, como la oportunidad de revisar el cumplimiento de la reforma pactada en los acuerdos de paz, hace catorce años, quienes imponen la agenda nacional únicamente miran a las elecciones, sobre todo para venerar la imagen del presidente de ARENA y del país, Antonio Saca, que no escatima esfuerzos para hacer campaña a favor de su partido. Los comicios de marzo, pues, han sido el asunto político más relevante durante el primer mes de 2006.

En este escenario ha habido menos cupo para las discusiones económicas. Tal parece que la apresurada carrera por las elecciones y la incontrolable violencia han llegado para ocupar los primeros puntos de la agenda nacional. Los medios informativos tampoco han hecho mayor cosa por escaparse de esta tendencia. El único asunto económico presente en el debate público, a sa-

ber, la postergada entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, conocido como CAFTA, ha sido integrado dentro de la lógica electoral. El gobierno de Saca mira dicho tratado comercial como un logro no solo de su gobierno, sino de su partido, y hace todo lo necesario para relacionar su aprobación con el éxito electoral de ARENA.

El año 2006 inicia, pues, con un preocupante escenario, pese a que los funcionarios gubernamentales se llenen la boca con palabras optimistas. La seguridad ciudadana es una deuda para el cuarto gobierno de ARENA, pero ello no es necesario para que los salvadoreños ejerzan la suficiente presión que haga cambiar el estado de la cuestión. ARENA sigue fortalecido electoralmente, pese a las equivocaciones cometidas por su gobierno. Mientras tanto, este le sigue apostando al libre comercio con la nación más poderosa del mundo para, según las promesas, garantizar el desarrollo del país a través de la generación de empleos y el aumento de las exportaciones. Este es, a grandes rasgos, el escenario con el que inicia este año, pero hay que relatar, con mayor detenimiento, los hechos relevantes en materia social, política y económica, en su orden.

## Sociedad

La violencia, se ha dicho líneas arriba, es una de las principales preocupaciones de los salvadoreños y de los que marcan la pauta de la opinión pública nacional. Así, el día 2, el matutino *La Prensa Gráfica* mostró un recuento de las estadísticas manejadas por la Policía Nacional Civil (PNC), en torno a los hechos violentos registrados durante el último día del año 2005 y el primero de 2006. Según la nota periodística, durante esas horas fueron asesinados 35 salvadoreños, la mayoría por arma de fuego; la Policía también registró 102 accidentes de tránsito, 255 lesiones en personas y 63 incendios. Al día siguiente, el mismo medio de prensa continuó publicando notas relacionadas con las estadísticas de violencia. Durante el año 2005

—prosiguió la fuente—, se cometieron 3 697 asesinatos, 935 más que el 2004, es decir, un 33.8 por ciento de aumento en términos porcentuales. En promedio, se cometieron 10.1 asesinatos al día. “Vamos a iniciar una cruzada contra la delincuencia y aquí es importante la participación ciudadana”, comentó el designado nuevo jefe policial, Rodrigo Ávila, quien ya dirigiera la PNC y fungía hasta diciembre de 2005 como viceministro de Seguridad Ciudadana.

El 5 de enero, el presidente de la República, Antonio Saca, oficializó el nombramiento de Ávila como nuevo director de la Policía Nacional Civil. En el marco de la ceremonia oficial, Ávila terminó de relevar algunos detalles de la estrategia orientada a disminuir los índices de violencia en el país. Sumados a la creación de las unidades antihomicidios y antiextorsiones, el nuevo director propuso la fundación de una Fuerza de Tarea Penitenciaria, integrada por policías y la Inspección de Centros Penales, a fin de prevenir delitos que son planificados en las cárceles del país. Ávila increpó a los jueces de la República: “este llamado es con énfasis a los honorables jueces, tenemos legislación que castiga con supermano dura a las pandillas, pero muchas veces no ha sido aplicada”, puntualizó. Un día después, el 6, los titulares del Ministerio de Gobernación, René Figueroa, y de la PNC, Rodrigo Ávila, se reunieron con el fiscal general en funciones, Romeo Barahona, para tratar la coordinación de esfuerzos que se tradujeran en la disminución de los altos índices de homicidios y extorsiones de las que son objeto los salvadoreños. Pero, más allá de la pose ante las cámaras, no se obtuvieron resultados concretos.

El día 8, la Policía Nacional Civil reveló un informe oficial definitivo sobre las cifras de homicidios cometidos durante el año 2005. De acuerdo con el mismo, fueron asesinados 3 mil 761 salvadoreños, cifras que, sin embargo, no habían sido cotejadas con las del Instituto de Medicina Legal o de la Fiscalía General de la República. El 80 por ciento de los asesinatos ocurrieron con armas de fuego; el 12 por ciento, con arma

blanca; y el 8 por ciento, con otro tipo de arma. El informe detalla, además, que la mayoría de víctimas fueron hombres de mediana edad residentes en zonas urbanas.

El 16, *La Prensa Gráfica* publicó detalles de un foro organizado por ese medio de prensa, para que el gabinete de seguridad de Saca expusiera el plan gubernamental orientado a disminuir los índices de violencia. En el marco del mismo, el director de la Policía reconoció que dentro de la institución todavía existen elementos que deben ser depurados. Sin embargo, Ávila distinguió entre un proceso de depuración superficial —que, a su juicio, llevó a cabo su antecesor, Mauricio Sandoval— y uno que sea más efectivo. “Muchos agentes fueron depurados porque llegaron con las botas mal lustradas, y lo digo con sinceridad”, dijo Ávila. Respecto del tema de la investigación criminal, el gabinete de seguridad reconoció sus deficiencias, pero también responsabilizó al Órgano Judicial. El ministro de Gobernación, pese a reconocer la necesidad de fortalecer la investigación científica, reconoció que el presupuesto para 2006 no incluía mejoras en esa área. La viceministra de ese ramo, Silvia Aguilar, fue menos optimista: “Estamos en situación anormal del crimen, por más laboratorios que se puedan tener pueden ser insuficientes”, declaró.

Durante el mismo foro, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Óscar Bonilla, dijo que el componente Mano Amiga, programa del gobierno para rescatar a jóvenes pandilleros, ha dado sus primeros frutos: la rehabilitación de 20 pandilleros, 15 de los cuales ya se encontraban reinsertados social y productivamente, según Bonilla. “El problema es que estos jóvenes siguen habitando los mismos lugares, los mismos barrios que son barrios de riesgo; mientras no haya un rescate integral de los barrios vamos a tener las dificultades que se están rehabilitando, porque se encuentran con una u otra pandilla o son víctimas de un enfrentamiento por las extorsiones”, dijo.

Finalmente, el 20, el fiscal general en funciones, Romeo Barahona, presentó a un gru-

po de fiscales que se encargarían de investigar casos de homicidios, junto con técnicos de la Policía Nacional Civil, sobre todo en las localidades consideradas por las autoridades como las más violentas, entre ellas Sonsonate, Colón, San Salvador y Soyapango. “Por hoy se distribuirán 14 fiscales en distintas oficinas de la Fiscalía, y luego se hará una reunión con autoridades policiales para distribuir grupos específicos, a fin de entrarle al problema de los homicidios”, declaró el asesor jurídico de la Fiscalía, Ovidio Portillo. Sin embargo, el mismo fiscal general reconoció que no tenían los recursos para trabajar en equipos integrados con agentes de la Policía.

El año ha comenzado, pues, con la remoción de Ricardo Meneses como director de la Policía Nacional Civil y el regreso de Rodrigo Ávila al frente del cuerpo policial. Apenas transcurridas dos semanas en el cargo, Ávila anunció su nuevo plan. El nuevo director dijo que el énfasis estaría en la detención de los cabecillas de bandas y pandillas organizadas, y que retomaría los llamados a la ciudadanía para que denuncie a aquellos. El nuevo plan implica, además, grandes erogaciones presupuestarias en publicidad y campañas de concientización entre la ciudadanía. El punto es inundar lo público. A la par, el partido oficial, bajo el lema “hagamos equipo”, utilizaba la imagen de agentes de la Policía para hacer campaña proselitista y pedir el voto. La estrategia pues, es la misma, aunque más sólida: copar los espacios públicos, utilizando la publicidad gubernamental y la del partido oficial, a fin de posicionarse electoralmente, cobijándose bajo la figura del presidente de la República, que no duda en poner su cuota al acusar irresponsablemente al FMLN de todos los males que aquejan al país. Es bastante probable que la nueva estrategia de seguridad de la Policía sea más publicitaria. Empezando por el tema financiero, pues el cuerpo policial no ha sido beneficiado con aumentos, sino con recortes presupuestarios en 2006.

La violencia, como se ha apuntado antes, ha aflorado también entre activistas y simpa-

tizantes de los partidos políticos, especialmente de los dos mayoritarios. En enero se registraron los primeros hechos en algunos puntos del país. ¿Quiénes fueron los responsables? Dificilmente se puede excusar a unos y otros, pues ambos bandos se provocan, contrario a lo dicho por el presidente del partido oficial, para quien los efemelenistas son los únicos responsables de los hechos registrados. Activistas del resto de partidos políticos también se han visto involucrados en los hechos lamentables. Es claro que la violencia conduce a más violencia y las provocaciones, al calor de la campaña, encuentran respuesta similar en el adversario. Sin embargo, el presidente de la República da una nueva muestra de su escasa vocación democrática al señalar únicamente al FMLN de esta situación. Con tales declaraciones, Saca se ha mostrado como un simple funcionario del partido oficial y no como el presidente de todos los salvadoreños.

Otro asunto que generó intranquilidad entre los salvadoreños y fue síntoma de inconformidad social fue la recurrencia de protestas públicas registradas durante el mes de enero. Tales acciones se dieron en respuesta a tres situaciones: la primera, por la carestía de agua en algunas comunidades del país; la segunda, por algunas reivindicaciones laborales; y, la tercera, por la campaña de asesinatos en contra de empleados del sector del transporte público por parte de supuestos pandilleros. En ese marco, el día 5, habitantes de comunidades del municipio de San Marcos, al sur de San Salvador, obstaculizaron el paso vehicular sobre la carretera que de Comalapa conduce a la capital, para protestar por la falta de agua en sus viviendas. El bloqueo duró unas tres horas. El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANANDA), Manuel Arrieta, ligó las protestas a intereses electorales: “Ya nos habían avisado que estos activistas iban a bloquear las calles”, dijo, sin ofrecer mayores opciones a los demandantes.

El 10, transportistas de la ruta de microbuses 140, que conecta San Martín con San Salvador, bloquearon las carreteras De Oro y

Panamericana por el asesinato de un cobrador de esa ruta, hecho cometido en San Martín. Días después, el 14, el asesinato de otro cobrador originó un hecho similar en la autopista a Comalapa, esta vez por transportistas de la ruta 138. El día 17 de enero, otro cobrador de la ruta 140 fue asesinado. Sus compañeros se volvieron a tomar, por dos horas, la carretera Panamericana. El 20, motoristas y empresarios de buses de la ruta 115, que hace su recorrido entre la capital y Tonacatepeque, paralizaron por el lapso de unas 5 horas un tramo de la carretera Troncal del Norte, a la altura del desvío hacia Tonacatepeque. Los transportistas protestaban por el asesinato de dos de sus compañeros que se negaron a pagar “renta” a los pandilleros que les extorsionan. Ese mismo día, un centenar de personas se concentró en una sede del Ministerio de Educación, en San Salvador, para demandar que los maestros sean incluidos en la nivelación salarial que gozaron el resto de empleados públicos, excepto los de Salud y Educación. Otras protestas se desarrollaron en la capital, en apoyo a las demandas de los empleados de las dos Carteras de Estado.

El 21, a pocas horas del bloqueo protagonizado por transportistas de Tonacatepeque, empleados de algunas rutas de Cuscatancingo, en San Salvador, bloquearon la entrada principal a ese municipio, en protesta por el asesinato de uno de sus compañeros. El 24 ocurrió una nueva acción de protesta, esta vez en Mejicanos, debido al asesinato de otro empleado del transporte, esta vez de la ruta 2-A. El director de la PNC hizo un nuevo llamado a los transportistas, a fin de que denunciaran a los pandilleros que los extorsionan. “Si quieren que esto termine, tienen que declarar [...] y que las pandillas sientan el peso de la acusación”, dijo el jefe policial. Con este homicidio en el sector transporte ya sumaban siete en lo que va del año. Finalmente, el 25 tuvo lugar una nueva protesta en San Marcos por habitantes de ese municipio que resienten la escasez de agua. Los protestantes demandaron de ANDA que les resuelva el problema que padecen. El mes

culminaba, pues con muchos sectores sociales inconformes, ante la incapacidad de las autoridades correspondientes.

En cuanto a los rubros de educación y salud, destacó, en primer lugar, el tortuoso inicio escolar para algunos alumnos, cuyos centros escolares sirvieron como albergues durante la emergencia suscitada por las copiosas lluvias del año pasado; en segundo lugar, la amenaza de una epidemia ocasionada por el repunte de casos de enfermedades gastrointestinales, sobre todo en niños. Y es que, hasta el 10 de enero, las autoridades del Ministerio de Salud habían registrado un repunte de casos de diarrea, especialmente en la zona occidental del país. El rotavirus se perfilaba como el principal sospechoso de causar el auge de casos. Al inicio de la tercera semana del mes, la prensa reveló que en la actual temporada, que inició en noviembre de 2005, ya se habían confirmado 49 casos de rotavirus en todo el país, 27 de ellos entre el 1° y el 17 de enero. “El hecho de que se hayan confirmado 27 casos no quiere decir que ese sea el total; probablemente haya más”, adelantó el viceministro de Salud, José Ernesto Navarro.

Por otro lado, el día 5, la ministra de Educación, Darlyn Meza, reveló que, ante la inminencia del inicio del año escolar, la cartera de Educación detectó que, en al menos ocho centros escolares que sirvieron como albergues para acoger a los cientos de damnificados por el huracán Stan, había ocurrido sustracción del mobiliario y equipo. Además, anunció que su cartera de Estado invertiría unos 40 mil dólares en labores de limpieza en esos ocho centros escolares. Al día siguiente, Sandra de Barraza, integrante de la Comisión Nacional de Desarrollo, escribía en su columna de opinión en un medio de prensa que la utilización de centros escolares como refugios es normal, “pero ahora nos enteramos que 12 mil alumnos están en riesgo de quedarse literalmente en la calle”, retomando así el debate en el marco del cual se abogaba para que los centros escolares ya no fueran utilizados como albergues en caso de emergencia. El 16 de enero, decimocuarto aniversario de la firma de la paz, el presi-

dente Antonio Saca y la ministra de Educación inauguraron, en Soyapango, el año lectivo correspondiente a 2006. Saca dijo que la educación sería una de las prioridades de su gestión; en virtud de lo cual, aseguró, habrá 27 millones de dólares más para este año, es decir, un presupuesto de 574 millones de dólares, que incluyen 64 millones provenientes de préstamos aprobados. Con el refuerzo presupuestario, el mandatario dijo que se daría mayor impulso a los 10 programas del llamado Plan 2021; otros 20 millones serían orientados a cubrir el incremento del 10 por ciento al sueldo pagado a los maestros del sistema público de educación, que es aparte del aumento general a los empleados públicos. Las autoridades del ramo esperaban la incorporación de unos 52 mil nuevos alumnos al sistema.

## Política

Sin duda, la coyuntura electoral ha sido lo más relevante de la política durante el primer mes del año, aunque no ha sido el único pertinente. También, pero en menor medida, se ha discutido sobre denuncias de manejos administrativos irregulares en algunas dependencias del Estado y sobre el rumbo de la política internacional asumida por el gobierno salvadoreño, en torno a las medidas antiinmigrantes discutidas en Estados Unidos. A mediados del mes, algunos sectores nacionales, sobre todo críticos al gobierno de Saca, denunciaron la escasa atención oficial hacia el decimocuarto aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Dichos sectores, entre ellos la UCA, no solo han seguido poniendo en tela de juicio el supuesto cumplimiento de los históricos acuerdos, sino que han propugnado por un entendimiento y diálogo nacional, que se traduzca en un escenario más favorable para que se den avances sustanciales en los temas vitales de la nación. Con todo, el mes concluía con luto: el día 25, por la tarde, fallecía el máximo líder del FMLN, Schafik Jorge Handal.

En lo concerniente a las elecciones, pues, hay mucho que apuntar, pero baste un breve

recuento de los hechos más importantes. El día 8 de enero, antes que los partidos tuvieran permitido pedir el voto para diputados, el periódico *La Prensa Gráfica* reveló que la producción de leyes en la Asamblea Legislativa fue bastante escasa durante el 2005. De acuerdo con un informe de trabajo filtrado a ese medio de prensa, los diputados emitieron 564 dictámenes, es decir, un promedio de 47 mensuales y de 1.5 al día. Las 23 comisiones de trabajo —entre permanentes y especiales— se reunieron 509 veces y suspendieron 273 convocatorias por inasistencia de los propios legisladores. “Si hemos suspendido reuniones, se debe a compromisos que diputados tienen con sus partidos”, comentó sin ruborizarse el legislador del PCN, Mario Ponce.

El 11, los partidos políticos en contienda iniciaron la campaña para diputados, estando facultados para pedir el voto. ARENA congregó a sus militantes en el municipio de Izalco, Sonsonate, en donde el orador principal fue el presidente de la República y de ese partido, Antonio Saca. “Les vengo a pedir de corazón el voto, para que me den más diputados, porque necesito gobernar y cumplir el resto de promesas”, dijo Saca. Por su parte, el FMLN concentró a militantes y simpatizantes en San Salvador, conectándose desde el Reloj de Flores, al extremo oriente de la capital, hasta la Plaza de las Américas o Salvador del Mundo, con una cadena humana. “Estamos seguros que el pueblo va a acompañar al FMLN. Le apostamos a mantener la mayoría”, puntualizó el coordinador general de ese partido, Medardo González. Por otro lado, en Chalchuapa, Santa Ana, también en el occidente del país, el PCN congregó a unas dos mil personas para oficializar el inicio de la campaña para diputados. El encargado de dirigirse a los presentes fue el legislador Francisco Merino, quien busca una diputación por Santa Ana. “Esta es la oportunidad para corregir ese rumbo equivocado que llevan nuestros municipios y el país”, dijo.

El 14, el PDC convocó a unas dos mil personas para los mismos fines que sus ad-

versarios. Los democristianos se reunieron en el parque central de Santa Ana, donde ese partido lleva a Orlando Mena como candidato para quedarse con la alcaldía de esa ciudad. Los líderes del partido coincidieron en que quieren convertir al PDC en una opción de centro y distanciarse de las extremas representadas por ARENA y el FMLN. El 16, coincidiendo con el decimocuarto aniversario de la firma de la paz, los partidos Cambio Democrático (CD), Popular Social Cristiano (PPSC) y la última escisión del FMLN, el Frente Democrático Revolucionario (FDR) lanzaron su plataforma legislativa en un discreto evento al que asistieron unas 300 personas, según las notas de prensa. La coalición de partidos aspira a mantener una cuota de 14 diputados en la Asamblea Legislativa, para negociar con las dos fracciones mayoritarias.

El 19, el hecho de que el número de votantes que aparecen en el registro electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los datos del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), propició un enfrentamiento entre ambas instituciones. Cuestionado por ese hecho, el presidente del TSE, Walter Araujo, expresó: “no hay nada raro, solo incorporamos lo que no[s] da el RNPN. Ellos deben decir por qué hay duplicados”. Por su parte, la registradora nacional, Miriam Mixco, salió en defensa de la institución que representa. “No permitiré que la incapacidad informática del tribunal afecte la imagen del registro”, puntualizó. El resto del mes, fue más de lo mismo: propaganda política y promesas por todos lados.

En otro orden, la denuncia por irregularidades en algunas dependencias del Estado también fue motivo de discusión entre algunos periodistas y gestores de opinión pública. En esa línea, el día 5, el matutino *La Prensa Gráfica* —uno de los medios más interesados en destapar casos de corrupción— reveló detalles de un informe preliminar de la Corte de Cuentas de la República, en el que se detectó la adjudicación irregular en un proceso de licitación para la compra de medicamentos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). La Corte señala en el informe que la

directiva del ISSS debería responder por la suma de 1 millón 449 mil 480 dólares que le fueron erogadas a una empresa por el suministro de medicamentos. Otras empresas cobraban una cantidad significativamente menor por el mismo suministro, lo cual despertó duda entre los auditores. La auditoría se realizó a petición del mismo director del ISSS, Jorge Mariano Pinto. Este, cuestionado acerca de su relación con el consejo directivo de la institución, aseveró que “hemos estado en absoluto divorcio por intereses ajenos a los institucionales”.

Ese mismo día, el representante de la empresa ganadora en el proceso de licitación, Humberto Bukele, defendió la resolución tomada por el consejo directivo: “En el ISSS hay desorden administrativo y pugna de poder. El consejo hizo lo correcto”, acotó el empresario. Mientras tanto, las otras dos empresas participantes en la licitación acusaron al director del ISSS y al mismo consejo directivo por permitir que la otra empresa resultara favorecida. Ambas empresas alegaron que llenaban todos los requisitos técnicos necesarios y, además, presentaron ofertas más bajas. El 12, *La Prensa Gráfica* dio a conocer que, en contraste con las reducciones presupuestarias que sufrirán los 11 hospitales del Seguro Social en todo el país, los miembros del Consejo Directivo de la institución se triplicarían sus honorarios profesionales en calidad de “dietas”, es decir, la bonificación económica por asistir a las reuniones. Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), David Cabezas, confirmaba a la prensa que se había detectado bajo rendimiento entre varias jefaturas de la institución. De acuerdo con la nota elaborada por *La Prensa Gráfica*, “las deficiencias van desde incumplimiento de planes de trabajo, hasta presuntas ilegalidades en el nombramiento de al menos uno de los jefes, así como un alto porcentaje de inasistencia a las labores”. El 13, algunos de los directivos del CNJ desmintieron a su presidente y, por el contrario, dijeron que otras auditorías respaldaban el buen funcionamiento de las dependencias que dirigen.

En lo concerniente a política internacional, el gobierno salvadoreño tuvo que fijar su posición respecto del proyecto de construcción de un muro que divida algunos tramos de la frontera entre México y Estados Unidos, propuesta de un sector de este último país. En términos generales, la posición oficial del gobierno de El Salvador fue la de reconocer la libre determinación de su colega estadounidense. En esa línea pueden leerse las declaraciones del presidente Saca y de su ministro de Relaciones Exteriores. “No lloraré frente a un muro, porque con eso no les resuelvo el problema a mis compatriotas”, manifestó el presidente Saca el día 5 de enero, al rechazar la petición de la fracción legislativa del FMLN para que el gobierno de El Salvador se pronunciara en contra del proyecto de construcción del muro. Dicho proyecto y las iniciativas antiinmigrantes que ocurrían en Estados Unidos fue motivo de que los cancilleres centroamericanos se reunieran en este último país para presentarle a los norteamericanos una propuesta migratoria común. “A mi no me gustaría que se construyeran muros, definitivamente yo soy enemigo, si se están cayendo muros. Pero no puedo ponerme a lamentar frente a un muro si los Estados Unidos deciden construirlo; tienen todo el derecho de hacerlo”, insistió Saca.

El 9, los cancilleres de Centroamérica, República Dominicana, Colombia y México se reunieron en este último país para intentar presentar una posición común respecto del tema migratorio con Estados Unidos. “No es insultando a Estados Unidos como se va a lograr una reforma migratoria que tome en cuenta los intereses de los salvadoreños”, dijo el canciller salvadoreño, Francisco Laínez, describiendo la postura oficial del gobierno de El Salvador en la cumbre de cancilleres. Otros cancilleres se mostraron más críticos de la propuesta estadounidense y la prensa nacional se encargó de destacar la medida del salvadoreño. Al término de la reunión, los ministros de Relaciones Exteriores aprobaron una declaratoria en la que no hicieron mención alguna del tema del muro, pero sí emitieron un mensaje en contra del proyecto

de ley HR 4437, aprobado por la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, y que pretende convertir en delito la migración de personas indocumentadas. “El establecimiento de esquemas de trabajadores temporales es un elemento esencial para lograr procesos migratorios legales, seguros, ordenados y respetuosos de los derechos humanos”, se lee en la declaratoria final. “Los emigrantes, independientemente de su condición migratoria, no son ni deben ser tratados como delincuentes”, reza parte del texto firmado por los cancilleres.

Días después, diversos sectores nacionales le reclamaban al gobierno su fría posición ante el decimocuarto aniversario de los acuerdos de paz. El 15, como parte de los actos alusivos al aniversario, se celebró una misa en catedral Metropolitana, a la que acudieron diversas personalidades de la política y la sociedad salvadoreña. El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, hizo una valoración sobre la situación del país a 14 años de la firma de la paz; asimismo, hizo mención sobre el documento histórico que puso fin a la guerra. “El hermoso documento causa admiración al mundo entero, pero todavía falta mucho para que se lleve a la práctica en puntos tan sensibles como al que se refiere al tema económico y social”, dijo el prelado católico. Por su parte, el ministro de Gobernación, René Figueroa, dijo ese mismo día que no habría celebración oficial del aniversario debido a que su gobierno considera ese tema como “finiquitado”.

Con un tono crítico, el día 18, en su columna de opinión, publicada en un medio escrito, Joaquín Samayoa sostenía que “es lamentable que un acontecimiento tan trascendental haya ido quedando como huella cada vez más tenue en la memoria histórica de los salvadoreños que lo vivimos, y como dato casi trivial en el bagaje de los conocimientos de los que en aquel momento eran muy jóvenes o ni siquiera habían nacido”. Refiriéndose a quienes lo incumplen y a quienes hacen el papel de víctimas de su incumplimiento, Samayoa apuntó que “en vez de reclamarle al pasado, deberíamos examinar



honestamente por qué no estamos aprovechando mejor las posibilidades que crearon los acuerdos de paz para la competencia política y la participación ciudadana”.

En todo caso, pocos sectores de la sociedad mostraron su disposición a abordar el asunto de la refundación del país, tema ineludible en los acuerdos de paz. Los medios de prensa que se unieron a las voces que retomaron el debate sobre los acuerdos se centraron en “descubrir” los entretelones de las negociaciones entre el gobierno y la antigua guerrilla del FMLN, sobre todo desde la perspectiva de los negociadores gubernamentales, que han sido presentados como los grandes impulsores de la paz. Sin embargo, más allá de algunas conmemoraciones públicas —como la organizada por el FMLN y por la iglesia Católica— que no tuvieron el relieve de años anteriores, los acuerdos de paz fueron relegados, prácticamente, de la agenda política, bajo el supuesto de que han sido superados y El Salvador se ha encaminado hacia otra etapa.

En la actualidad, los partidos políticos que se valieron de los acuerdos de paz para su agenda particular son los más interesados en sepultarlos, o en quitarle sus aristas más incómodas. Pero los acuerdos, concebidos más bien como una plataforma mínima de transformaciones sociales, políticas y económicas para iniciar y consolidar la democratización del país, implican un serio desafío para los partidos políticos: el imperativo de renunciar a sus aspiraciones de poder total en favor de la constitución de un tipo de convivencia social basada en el diálogo y la inclusión. En ese sentido, la campaña electoral, vista en enero, ha estado desconectada de los acuerdos de Chapultepec. Esta desconexión no se mide tanto por la ausencia de referencias acerca de los acuerdos en las plataformas de los partidos políticos, sino en la ausencia de las transformaciones políticas, sociales y económicas propuestas por los acuerdos, las cuales quedaron sin hacerse.

De manera implícita, por ejemplo, en la plataforma de ARENA se asume que los acuerdos de Chapultepec se cumplieron con

solvencia y que el país se encuentra en una democracia plena. Se quiere ignorar, por tanto, que El Salvador adolece de una institucionalidad democrática débil y que su población se debate en un clima de inseguridad generalizado: inseguridad ciudadana, inseguridad social e inseguridad económica. Existe, pues, un divorcio entre las propuestas y los problemas reales. A este respecto, la propuesta legislativa para el período 2006-2009 del partido ARENA deja mucho que desear. Sus estrategias se centran en el combate a la delincuencia desde una concepción primordialmente represiva y con un aparato judicial débil, o cuando menos, servil hacia una policía más interesada en hacer capturas que en otra cosa; en segundo lugar, en la continuación de las políticas sociales asistencialistas que tanto éxito publicitario parecen haber rendido; una concepción de desarrollo económico concebida como la mejora de la infraestructura física del país (las carreteras evidencian que el país progresa) y como algo que depende de los TLC.

En ningún momento se ha tomado en cuenta el fortalecimiento de la institucionalidad democrática ni de la participación ciudadana. Tampoco se han ofrecido diálogo y concertación reales para encarar los problemas que afectan a todos. Tanto la Propuesta Legislativa 2006-2009 como el Plan de Gobierno municipal del partido ARENA, por ejemplo, demuestran cómo se pretende pasar la página de los acuerdos de paz, sin haber resuelto los problemas que estos se proponían resolver.

El ámbito político culminaba en enero con una nota luctuosa. El día 24, el jefe de la fracción legislativa del FMLN y líder indiscutible de ese partido, Schafik Jorge Handal, falleció a los 75 años de edad. Handal se desplomó al no superar un infarto que padeció momentos después de arribar en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, cuando, acompañado del coordinador general del FMLN, Medardo González, regresaba de La Paz, Bolivia, en donde asistió a la toma de posesión del presidente Evo Morales, quien era su amigo. Inmediatamente, los políticos de todos los colores expresaron sus muestras de condolencia y elogiaron la figura del líder

de izquierda. “A Schafik Handal debemos recordarlo por los buenos momentos, no por las diferencias”, comentó el presidente Antonio Saca. El 29, luego de cinco días de homenaje y tres de duelo nacional, los restos de Handal fueron sepultados en el cementerio de Los Ilustres, en San Salvador.

Lo cierto es que con Handal se apagaba no solamente una figura emblemática de la izquierda, sino también uno de los líderes políticos más importantes de la historia contemporánea. La vida de Handal está entrelazada con esa historia. Las reacciones del FMLN y de ARENA, como se ha apuntado antes, no se hicieron esperar. El primero comenzó a reivindicar la talla histórica y el talante ético del dirigente nacido en 1930. ARENA, por su parte, se condolvió públicamente por el fallecimiento de su rival. El presidente Saca no se contentó únicamente con ir personalmente a expresar sus condolencias a los deudos del dirigente comunista, sino que también respaldó la moción efemelenista de decretar tres días de duelo nacional por la muerte de Handal.

Los días inmediatamente posteriores al deceso del dirigente izquierdista estuvieron colmados de actividades públicas y movilizaciones populares. La conmoción que la pérdida de esta figura provocó en la izquierda hizo que, tanto los militantes actuales del FMLN como aquellos que, en su momento, se enfrentaron a Handal y se separaron del partido de izquierda, se reencontraran. El resultado más visible de este reencuentro fueron las multitudes que acompañaron al otrora secretario general del Partido Comunista, tanto en la Universidad de El Salvador, en la Asamblea Legislativa, como en el cortejo fúnebre que partió de catedral Metropolitana hasta el cementerio de los Ilustres.

## Economía

Finalmente, hay que abordar el tema económico, dentro del cual, el postergado inicio del CAFTA ha sido la nota principal, aunque algunos sectores nacionales, paralelamente al optimismo gubernamental, hicieron muestras públicas de su preocupación por el débil cre-

cimiento de la economía del país. Ambos asuntos se destacan a continuación. Y es que, el día 19, una delegación gubernamental y empresarial salvadoreña todavía negociaba en Washington para cerrar acuerdos en materia de seguridad agrícola y de propiedad intelectual, requisitos añadidos por los negociadores estadounidenses para poder iniciar el TLC con Centroamérica y República Dominicana. Para poder cumplir con los requerimientos legales, El Salvador ya había modificado 13 normativas y leyes, a fin de entrar en el CAFTA. Un día después, la delegación salvadoreña volvía con las manos vacías de Estados Unidos y con la incertidumbre sobre la entrada en vigencia del tratado comercial.

Siempre en materia económica, a principios de enero, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó un crecimiento económico para el país de 3.5 por ciento en el presente año. En la presentación del informe *Situación y perspectivas para la economía mundial*, la entidad destacó que, en 2006, la economía salvadoreña tendría un mayor desempeño que los años anteriores. Esta mejoría puede asociarse a la entrada en vigencia del CAFTA, el repunte de los sectores agrícola y turismo, como también un mayor dinamismo del rubro de la construcción. Con todo y estos aspectos a favor, el documento destaca que aún faltan más elementos de análisis para constatar que el país se encuentra en una situación de “despegue económico”.

También durante el inicio del mes, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) presentó un avance de su estudio *Escenarios de crecimiento de El Salvador a largo plazo*. El estudio pretende establecer los distintos rumbos que puede tomar la economía debido a tres posibles escenarios. El primero de ellos sería realizar cambios que no están acordes al modelo económico; el segundo sería no realizar cambios de ningún tipo y dejar todo tal como está; el último sería realizar cambios positivos de acuerdo al modelo, dejando de hacer lo que a la fecha está mal. De esta investigación se desprende la necesidad fundamental de com-

batir la pobreza y generar equidad. Se reconoce que solo el crecimiento con equidad permite un crecimiento sostenido.

Pues bien, en un ambiente de violencia generalizada, de falta de consensos en la vida política, de demandas sociales sin respuesta gubernamental y de extrema pobreza se evidencia la necesidad de generar un crecimiento económico basado en la equidad. Es interesante notar que algunas de las que promueven este tipo de crecimiento provienen del sector empresarial. ¿Por qué se estaría operando un cambio de mentalidad? En el *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005* del PNUD —documento presentado en diciembre pasado y que, al menos en enero, no ha generado mayores muestras de cambio— se destaca la incongruencia de un modelo económico emergente con la realidad social del país. Mientras que el gobierno se jactaba de tener una estabilidad macroeconómica envidiable y altos niveles de competitividad, la sociedad padecía un bajo nivel de empleo y, fruto de ello, mayor cantidad de emigrantes a los Estados Unidos y otros países. Ahora que la estabilidad macroeconómica está en riesgo y la competitividad nacional ha disminuido, se habla de cambios económicos importantes: para el PNUD es necesario un cambio de políticas económicas; para el INCAE, se trata de promover la equidad y, para la CEPAL, es el “desarrollo productivo en economías abiertas”. Algunos empresarios, al parecer, han comenzado a vislumbrar que este país no será viable en los próximos años si no se realizan cambios sustanciales. Constantemente, entidades nacionales e internacionales y, mediante el INCAE, algunos empresarios, han llamado la atención sobre la necesidad de dichos cambios para sacar adelante al país.

Este es el escenario que, a grandes líneas, ha primado durante el primer año del 2006. Sin duda, se han abordado temas vitales, pero se han dejado de lado otros no menos importantes. Uno de ellos, el de la violencia, sí ha generado amplias discusiones, pero eso no ha conducido a que se opere un cambio de mentalidad y de prácticas en-

tre los responsables gubernamentales de enfrentar dicha situación. Se ha iniciado con estas líneas y abordado el asunto de la violencia y de los homicidios, destacando la necesidad de que se definan estrategias que conduzcan a la minimización del clima de inseguridad que impera en el país y se termina de la misma forma. La coyuntura electoral que ha atravesado el país al inicio de 2006 puede servir bien como una oportunidad para que el Estado y otros sectores retomen con seriedad el tema de la seguridad ciudadana o bien como un obstáculo. Las fuerzas políticas en contienda, sobre todo ARENA, ya han hecho públicas algunas iniciativas sobre la materia, aunque sin mayor profundidad. El partido oficial, a tono con el enfoque impreso por el Ejecutivo desde el gobierno de Flores, le apuesta a más detenciones, pese a que dicha acción ha mostrado su ineficacia. También se ha hablado de fortalecer los organismos encargados de la investigación del delito —que involucran directamente a la Policía y a la Fiscalía General de la República—, pero no se han tomado acciones concretas. Por ejemplo, no se habla de refuerzos presupuestarios para el cuerpo policial, bajo la excusa de que debe invertirse bien el dinero del que se dispone, que hoy es menos que antes. Con ello se está aceptando implícitamente que los recursos económicos se han invertido mal.

El partido oficial le sigue apostando al plan del Ejecutivo “País seguro”, pero no reconoce el fracaso del mismo en lo que Saca lleva gobernando la nación. Curiosamente, los índices de homicidios y delitos graves han aumentado, pero buena parte de los salvadoreños sigue respaldando el manejo gubernamental sobre la violencia. Es claro, pues, que la imagen positiva que el presidente Saca proyecta entre la población ha hecho olvidar a esta que debe exigir más a sus gobernantes, sobre todo cuando el deterioro social es más evidente.

También desde la Asamblea Legislativa se podría hacer un trabajo más intenso, pero, por el contrario, la actividad parlamentaria fue ajena al clima de inseguridad imperante en El Salvador durante 2005. Los diputados únicamente aprobaron algunas reformas a la

Ley de Armas y Municiones. Nada más. Y lo que han hecho antes ha sido seguir casi al pie de la letra las órdenes del Ejecutivo, aprobando las nefastas leyes antimaras. Como afirmara recientemente el legislador Héctor Dada Hirezi, del CD, la Asamblea no solo puede legislar, sino generar y apoyar un debate nacional sobre el tema, de modo que los principales actores involucrados tomen conciencia de la inviabilidad social a la que conduce la situación de violencia. Y es que la emigración, por ejemplo, no solo responde a motivos económicos y de subsistencia, sino a la misma situación de inseguridad que prima en el país. Dígase lo mismo de la relación directa entre violencia y la escasa inversión extranjera en el país. En suma, de los discursos grandilocuentes característicos de la campaña electoral se debe transitar a una toma de conciencia y puesta en marcha de acciones concretas, más allá de los planes publicitarios y electoreros impulsados por el Ejecutivo y los cambios cosméticos en las dependencias estatales correspondientes.

La ciudadanía puede hacer también lo suyo, planteando propuestas a los candida-

tos y exigiendo el cumplimiento de las mismas; además, negando el voto a quienes no han sabido solucionar los problemas más sentidos de la sociedad. Los ciudadanos pueden exigirle también a sus gobiernos locales acciones coordinadas con el Ejecutivo, a fin de organizar iniciativas locales que se traduzcan en la disminución en la comisión de delitos. Algunos países tienen experiencias positivas de iniciativas comunales que trabajan en coordinación con las autoridades policiales para garantizar la tranquilidad ciudadana. Obviamente, esto dista mucho de la realidad salvadoreña, donde fallan cuestiones tan elementales como la protección y encubrimiento de testigos en los procesos judiciales; pero ello no es motivo para desistir.

Si las cosas siguen como están, si las estadísticas de violencia siguen aumentando y no se toman cartas en el asunto, el deterioro del tejido social salvadoreño será mayor, lesionando aún más la convivencia y tranquilidad de la población. Las elecciones del 12 de marzo pueden ser una nueva oportunidad para retomar con seriedad y responsabilidad el tema de la seguridad ciudadana.